

# **ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO DEL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 2024**

## **ASISTENTES:**

### **Excmo. Sr. Presidente**

D. Ignacio José Subijana Zunzunegui

### **Ilmos. Sres.**

D. Luis Ángel Garrido Bengoechea

D<sup>a</sup> Garbiñe Biurrun Mancisidor

Dña. Mercedes Guerrero Romeo

D. Aner Uriarte Codón

D. Emilio Lamo de Espinosa Vazquez de Sola

Dña. Ariane Tapia Trueba

### **Ilma. Sra. Secretario de Gobierno en funciones**

D<sup>a</sup> Ascensión Roncero Linares

## **PRIMERO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR. -**

Leída el Acta de la reunión, es aprobada por unanimidad.

## **SEGUNDO. - EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR. -**

La Sala es y queda informada del cumplimiento de los acuerdos adoptados en la reunión anterior.

## **A C U E R D O S:**

### **1.- Magistrados y Jueces**

#### **1.1.- JUNTA DE JUECES DE LO SOCIAL DE BILBAO**

Se da cuenta al Pleno del Acta de la Junta de Jueces de lo Social de Bilbao de fecha 05 de junio de 2024 Social del tenor literal siguiente:

*“En relación al único punto del orden del día sobre: RECHAZOS DE DEMANDAS POR EL JUZGADO DECANO*

*Por el Juez Decano se reparte documentación escrita sobre consistente en la Guía de Buenas Prácticas del comité de Avantius, así como un Acuerdo Gubernativo de la Letrada de la Administración de Justicia de fecha 21 de mayo de 2024, sobre una*

solicitud de justificante de rechazo de demanda, en la cual se cita otro Acuerdo Gubernativo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia sobre una queja al respecto, de fecha 4 de diciembre de 2023 (queja 21/2023). Se acompañan como Anexos n° 1 y 2.

Por la Junta se presenta de manera unánime el siguiente escrito, que se transcribe a continuación:

A la atención de la Excma. Sala de Gobierno de TSJPV

Por la presente queremos ponerles de manifiesto una disfunción que hemos percibido en el sistema de registro de Avantius al objeto de que se adopten las medidas oportunas para garantizar la tutela judicial efectiva de las partes que puedan verse implicadas.

Hemos tenido conocimiento que, en varios procedimientos de esta jurisdicción social, por el Registro de Decanato han sido devueltas demandas a los profesionales que las habían remitido telemáticamente. Los Letrados han manifestado que no se les había comunicado su rechazo, o que aun recibiendo comunicación en el sentido que tales escritos se habían enviado correctamente, debían entrar en el programa Avantius porque el mismo podía inadmitirlas sin comunicación fehaciente.

Los procedimientos en los que se ha detectado la disfunción son los siguientes:

-Juzgado Social n° 5, Autos 285/2024, presentada el 6/09/2023, y nuevamente presentada el 12/03/2024; Autos despido 392/2024, presentada el 24/04/2023 y nuevamente presentada el 11/04/2024; Autos ordinario 492/2024, presentada el 17/04/2023 y nuevamente presentada el 8/05/2024; Autos despido 508/2024, inicialmente presentada el 24/04/2023 y nuevamente el 14/05/2024; autos despido con acumulación derechos fundamentales 569/2024, inicialmente presentada el 8/10/2022, nuevamente el 28/05/2024

-Juzgado Social n° 3, prestación, autos 541/2023 social 3, inicialmente presentada en abril de 2.023 y nuevamente en junio de 2.023;

-Juzgado de lo Social n° 2, autos prestaciones, inicialmente presentada el 19/12/2022, posteriormente el 9/05/2024.

Habiendo solicitado información al Juzgado Decano sobre estos extremos, toda vez que ya se ha planteado en las vistas la posible caducidad o prescripción de las acciones entabladas por los profesionales, por los responsables del Avantius se ha indicado lo siguiente:

“No constan errores generales de envío en el servidor de correo en las fechas indicadas y que no podemos auditar el dato de si en el momento de la inadmisión el usuario tenía activado y correctamente configurado dicho aviso mail ya que no se refleja en la Base de Datos. En todo caso, tal y como consta en el Protocolo de notificaciones y en el propio cuerpo de los avisos mail, estos correos informativos no son un medio fidedigno para la recepción y acceso de comunicaciones telemáticas ni excluyen las consecuencias procesales derivadas de la falta de acceso a las notificaciones recibidas en PSP, teniendo que acceder a la plataforma para comprobar y visualizar las comunicaciones recibidas por parte de los Órganos Judiciales (en este caso concreto, a través del menú Escritos de Inicio, puede comprobar la inadmisión de dichos envíos y el detalle del motivo de dicha inadmisión en PSP)”.

Los hechos descritos impiden a cada Magistrado comprobar si tales rechazos han sido debidamente comunicados al Letrado, además de ser susceptibles de vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, revistiendo a juicio de los que suscriben extrema gravedad, por lo que solicitamos se adopten las medidas oportunas para evitar su repetición, quedando a la espera de ser informados de las actuaciones que se adopten al respecto.

*Asimismo, poner de manifiesto que se han presentado demandas duplicadas con idéntico contenido, a los efectos que procedan, como en el Juzgado de lo Social nº 7 de Bilbao, Autos seguridad social nº 89/2024 y nº 101/2024.*

*A partir de dicho escrito, la Junta insiste en que cada Juzgado de lo Social debe poder saber si se ha notificado el rechazo por el Juzgado Decano a quien ha presentado la demanda, añadiendo que cualquier rechazo debe venir mínimamente motivado. Asimismo, a quien presenta la demanda rechazada debe notificársele expresamente el rechazo, sin que se pueda alegar que aquel debe entrar en el PSP para conocer tal cuestión. La Junta considera que debe habilitarse un sistema para que se solucione el problema, pues, insiste, no puede rechazarse una demanda sin que lo conozca el presentante, y sin que el Juzgado pueda cerciorarse de ello. Recuerda que en muchas aplicaciones informáticas no se puede avanzar si no se rellenan los campos obligatorios, y consideran que el sistema actual de rechazo, en el que interviene un funcionario de Decanato no es correcto. Se añade que se rechazan demandas por falta de intervinientes, pero que también les llegan demandas, obviamente no rechazadas con falta de intervinientes.*

*La Junta explica que muchos de los profesionales que presentan la demanda rechazada no se aperciben del rechazo. Lo que se une al importante retraso en la tramitación de los procedimientos por parte de varios Juzgados, atendiendo a la altísima carga de trabajo que sufre la jurisdicción; lo que provoca que dichos profesionales confíen en que la falta de tramitación se debe al retraso, no al rechazo no notificado expresamente. En consecuencia, se aperciben de ello mucho más tarde, presentan la demanda de nuevo con escritos específicos (se acompaña un ejemplo real al respecto como Anexo nº 3); y se producen alegaciones sobre caducidad de acciones, que deben resolver los Magistrados y Magistradas, en función de la fecha de presentación. Extremo al que no tienen acceso los Juzgados de lo Social, y que debe ser probado por las partes. Se añade que, en ocasiones, ese retraso ha venido acompañado de un pronunciamiento final de despido improcedente, con condena, entre otros extremos, al pago de salarios de tramitación extendidos en el tiempo como consecuencia de este retraso. Lo que supone un claro supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, con derecho a indemnización.*

*Tras un debate, la Junta concluye:*

- 1.- Que debe modificarse el sistema de rechazo de las demandas por el Juzgado Decano, de manera que sea efectivamente notificada a quien la presenta, de manera expresa, sin que tenga que entrar en la aplicación para ello. El rechazo deberá ser motivado, y los Juzgados que finalmente conozcan de la demanda deberán poder tener acceso a todos estos extremos.*
- 2.- En todo caso, la Junta entiende que no es una práctica correcta el hecho de que, en el Juzgado Decano se pueda rechazar la demanda. La Junta muestra su oposición por entender que esta práctica es contraria a la ley.*
- 3.- La Junta eleva una consulta al Comité de Avantijs sobre qué hacer cuando las partes del proceso social en marcha solicitan que se tengan por inadmitidas las demandas rechazadas, tal y como se solicita en el Anexo nº 3.”*

Se da cuenta al Pleno igualmente de la Ponencia elaborada por el Excmo. Sr. Presidente de este Tribunal Superior de Justicia, en cumplimiento del Acuerdo 1.2 de la Comisión Permanente de esta Sala de Gobierno de 5 de Julio de 2024, del tenor literal siguiente:

*PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO DE LA SALA DE GOBIERNO A LOS TEMAS SUSCITADOS POR LA JUNTA DE MAGISTRADOS/AS DE LO SOCIAL DE 5 DE JUNIO DE 2024*

*ANTECEDENTES*

*PRIMERO. - La Junta de Jueces de lo Social de Bilbao, en su reunión del día 5 de junio de 2024, acordó lo que sigue:*

- 1. Que debe modificarse el sistema de rechazo de las demandas por el Juzgado Decano, de manera que sea efectivamente notificada a quien la presenta, de manera expresa, sin que tenga que entrar en la aplicación para ello. El rechazo deberá ser motivado, y los Juzgados que finalmente conozcan de la demanda deberán poder tener acceso a todos estos extremos.*
- 2. En todo caso, la Junta entiende que no es una práctica correcta el hecho de que, en el Juzgado Decano se pueda rechazar la demanda. La Junta muestra su oposición por entender que esta práctica es contraria a la ley.*
- 3. La Junta eleva una consulta al Comité de Avantius sobre qué hacer cuando las partes del proceso social en marcha solicitan que se tenga por inadmitidas las demandas rechazadas, tal y como se solicita en el Anexo nº 3.*

*SEGUNDO.- Tras solicitar un informe de Tracasa sobre el funcionamiento de Avantius en el proceso de registro y reparto de demandas, la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno, en su sesión del 5 de julio de 2024, acordó que se elaborase una ponencia en la que se analizasen las siguientes cuestiones: -) diferenciación de los aspectos gubernativos y jurisdiccionales en el proceso de devolución por los Servicios de Registro y Reparto de escritos iniciadores y de trámite a los profesionales para la subsanación de requisitos y datos exigidos por la normativa técnica de aplicación definida por el CTEAJE; -) verificar si las funcionalidades del sistema de gestión procesal Avantius para la realización de la operativa descrita en el informe elaborado por Tracasa, cumple la normativa técnica vigente con el elemento adicional introducido por los artículos 41 y 42 del Decreto Ley 6/2023. Corresponde al Presidente su elaboración.*

*RAZONAMIENTOS JURÍDICOS*

*PRIMERO. - Normativa aplicable*

*El examen de las cuestiones planteadas por la Junta de Jueces de lo Social de Bilbao precisa deslindar el marco normativo aplicable para, desde el mismo, conferir una motivada respuesta al elenco de temas suscitados.*

*El artículo 41.1 del Decreto Ley 6/2023, por el que se aprueban las Medidas de Eficiencia Digital y Procesal del Servicio Público de Justicia (en adelante Decreto Ley 6/2023) dispone que las partes o intervinientes deberán presentar todo tipo de 11 referidos escritos y documentos deberán constar necesariamente: a) la identidad de la persona que lo presente; b) el órgano judicial, la oficina judicial u oficina fiscal a los que va dirigido; c) el tipo y número de procedimiento al que se debe incorporar y d) la fecha de presentación.*

*El artículo 44 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdiccional social (tras la modificación operada por el artículo 104 del Decreto Ley 6/2023) determina que las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en la forma establecida en el artículo 135 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiendo los trabajadores elegir en todo momento si actúan ante*

la Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no. De forma complementaria, el artículo 6.3 del Decreto Ley 6/2023 refiere que los y las profesionales que se relacionen con la Administración de Justicia tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o sistemas establecidos por las administraciones competentes en materia de Justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate. El artículo 135.1 LEC dispone que cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en el proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia, remitirán y recibirán todos los escritos, iniciadores o no, y demás documentos a través de estos sistemas, salvo las excepciones establecidas en la ley, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren. Lo que se acaba de indicar será también de aplicación a aquellos intervinientes que, sin estar obligados, opten por el uso de los sistemas telemáticos o electrónicos. Presentados los escritos y documentos por medios telemáticos, se emitirá automáticamente recibo por el mismo medio, con expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentación, en la que se tendrán por presentados a todos los efectos. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente.

corresponderá resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan. Por ello, en materia de reparto, les corresponde resolver en única instancia los recursos gubernativos que quepa interponer contra las decisiones de los Letrados de la Administración de Justicia en materia de reparto (artículo 168.2 a) LOPJ) y, en su caso, adoptar las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e irreparable (artículo 168.1 LOPJ).

#### SEGUNDO. - Examen de los temas planteados por la Junta de lo Social de Bilbao

La Junta de lo Social de Bilbao plantea tres cuestiones que vienen guiadas por una loable preocupación institucional y jurisdiccional: la garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las partes (artículo 24.1 CE). Al respecto contextualizan la referida preocupación en los siguientes términos: “Hemos tenido conocimiento de que, en varios procedimientos de esta jurisdicción social, por el Registro de Decanato han sido devueltas demandas a los profesionales que las habían remitido telemáticamente. Los Letrados han manifestado que no se les había comunicado su rechazo, o que, aun recibiendo comunicación en el sentido de que tales escritos se habían enviado correctamente, debían entrar en el programa Avantius porque el mismo podía inadmitirlas sin comunicación fehaciente”. En concreto, reseñan varios procedimientos en los que, según menta la Junta, se han producido las referidas disfunciones. En síntesis reseñan que cada Juzgado de lo Social debe poder saber si se ha notificado el rechazo por el Juzgado Decano a quien ha presentado la demanda; que cualquier rechazo de la demanda debe venir motivado y ser notificado expresamente al que presenta el escrito rector del proceso sin que sea preciso entrar en el Portal Profesional de Avantius para ello; que muchos profesionales, al tiempo, presentan la demanda de nuevo al no haberse apercibido del rechazo y se producen alegaciones de caducidad de acciones que deben resolver las magistrados y los magistrados sin poder acceder a lo ocurrido en el Decanato. Tras un debate formulan tres peticiones que vamos a analizar de forma individualizada.

2.1.- La Junta concluye que debe modificarse el sistema de rechazo de las demandas por el Juzgado Decano, de manera que sea efectivamente notificada a quien la presenta, de manera expresa, sin que tenga que entrar en la aplicación. El rechazo deberá ser motivado, y los Juzgados que finalmente conozcan de la demanda deberá poder tener acceso a todos estos extremos.

El sistema Avantius tiene configurado un sistema de devolución de escritos por los servicios de registro y reparto por los siguientes motivos: i) duplicidad; ii) error en el órgano de destino y iii) subsanación. En el espacio de la subsanación -que es el discutido en este caso- se tipifican tres causas referidas a la calidad digital de la demanda: calidad digital de la documentación, falta de registro en la demanda digital de las partes conocidas y error en la titulación de los documentos.

La subsanación con registro pero sin reparto de las demandas por ausencia de datos precisados por la normativa técnica (uno de los requisitos que las demandas deben cumplir ex artículo 41.1 del Decreto-Ley 6/2023) se notifica a la parte que presenta la demanda de forma telemática si es un profesional, porque es el sistema que la ley impone para la comunicación con los mismos (artículos 6.3 Decreto Ley 6/2023, 44 Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social y 135.1 Ley 1/2001, de la Ley de Enjuiciamiento Civil), o si es un trabajador y ha elegido esta forma de presentación de la demanda (artículo 44 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social). Por lo tanto, no cabe en vía gubernativa (tampoco jurisdiccional) exigir que la notificación sea efectúe sin entrar en la aplicación, dado que la modalidad de comunicación es la exigida por la Ley. Esta notificación viene acompañada, a través de una funcionalidad incorporada al PSP el 26 de enero de 2023 (respondiendo a una petición de los Colegios Profesionales de la Abogacía, Procuraduría y Graduados Sociales), de la opción de subsanar los errores sin perder los datos aportados en el escrito inicial. De esta manera, es posible su reutilización para complementarlo con los datos omitidos y exigidos por la normativa técnica, acompañándolo del justificante de presentación del primer escrito en el que figura la fecha de su presentación para que se produzcan los efectos jurídicos oportunos.

De forma incuestionable, la petición de subsanación sin inadmisión tiene que ser motivada. Así se contempla en el sistema de gestión procesal Avantius en el que existe un campo para reflejar las razones de la decisión de subsanación adoptada por falta de calidad digital de la demanda. El incumplimiento de este deber de justificación puede denunciarse a través del recurso gubernativo frente a la decisión adoptada por el Letrado de la Administración de Justicia en materia de reparto, de forma que sea el Decano quien resuelva esta situación (artículo 167.3 LOPJ).

Cuando en el proceso se plantee una cuestión jurisdiccional que venga referida a la decisión adoptada en materia de reparto (prescripción, caducidad, competencia), si el Juzgado o Tribunal estima que, de oficio, sin que lo aporten las partes, tiene que tener acceso a lo tramitado en el Decanato en materia de reparto, puede solicitar del Decanato la referida información.

2.2.- La Junta entiende que no es una práctica correcta el hecho de que en el Juzgado Decano se pueda rechazar la demanda. La Junta muestra su oposición por entender que esta práctica es contraria a la ley.

El Juzgado Decano no rechaza la demanda. El Servicio de Registro y Reparto, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 del Decreto Ley 6/2023, tras el registro de la demanda, solicita, en su caso, la subsanación de la misma por no reunir los requisitos establecidos por la normativa técnica para garantizar la calidad del dato telemático. En este caso, tal y como indica la normativa legal aplicable (artículos 41.2 del Decreto-Ley 6/2023), el sistema de gestión procesal tiene que garantizar la obtención de un recibo de su

*presentación, donde quede constancia de su contenido, fecha y hora (artículo 41.2 del Decreto-Ley 6/2023), y el Decanato tiene que comunicar a la parte a través del sistema telemático (si está obligado a ello, al tratarse de un profesional, o, tratándose de un trabajador o particular ha elegido esta forma de presentación de la demanda) la petición de subsanación así como las razones de la misma. En tal hipótesis, puede el Decano adoptar las medidas urgentes que fueran precisas en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e irreparable (artículo 168.1 LOPJ). En el sistema de gestión procesal Avantius (véase el informe de fecha 2 de julio de 2024 elaborado por Tracasa): i) se obtiene un recibo de la presentación de la demanda, donde queda constancia de su contenido, fecha y hora; ii) se comunica por el Servicio de Registro y Reparto a la parte a través del sistema obligado o elegido la decisión de complemento adoptada así como las razones de la misma y iii) deja a salvo, conforme a la legalidad vigente: -) la competencia del Juez Decano de adoptar las medidas urgentes sobre los asuntos no repartidos para evitar la quiebra de algún derecho o la producción de un perjuicio grave e irreparable; -) la competencia del Letrado de la Administración de Justicia del órgano al que se reparta el asunto de admitir o no procesalmente la demanda cuando se subsane lo solicitado y, finalmente, -) la competencia del órgano jurisdiccional de adoptar la decisión que proceda en respuesta a la petición de parte anudada a tal situación (caducidad, preferentemente).*

*No se produce, consecuentemente, una práctica del Decanato de Bilbao contraria a la ley.*

*2.3.- La Junta eleva una consulta al Comité Avantius sobre qué hacer cuando las partes del proceso social en marcha solicitan que se tengan por inadmitidas las demandas rechazadas. El Comité Avantius carece de competencia sobre cuestiones jurisdiccionales. Tampoco las tiene la Sala de Gobierno cuyas atribuciones son estrictamente gubernativas y destinadas al mejor ejercicio de la jurisdicción (artículo 152 LOPJ) con prohibición expresa de dictar instrucciones de carácter general o particular, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional (artículo 12.3 LOPJ). Corresponderá a cada Juzgado de lo Social adoptar, conforme a la normativa vigente, las decisiones jurisdiccionales precisas sobre las cuestiones que las partes planteen en el seno del proceso.*

*Por lo referido, propongo al Pleno de la Sala de Gobierno la adopción de las respuestas que se acaban de referir”*

El Pleno acuerda aprobar la ponencia elaborada por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y dar cuenta a los/las magistrados/as integrantes de la Junta de lo Social de Bilbao del acuerdo adoptado y del informe emitido por Tracasa respecto al funcionamiento de Avantius en esta cuestión.

## **1.2.- SUSTITUCIÓN DE MIEMBRO ELECTO DE SALA DE GOBIERNO POR LA CATEGORÍA DE MAGISTRADA.**

Se da cuenta al Pleno del cambio de situación administrativa de servicio activo a servicios especiales de la Ilma. Sra. Magistrada Doña Inés Soria Encarnación miembro electo de esta Sala de Gobierno.

Por el Pleno por unanimidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 151.5 de la LOPJ y en el artículo 51 y siguientes del Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, procede a la designación como miembro del

Pleno a la Ilma. Magistrada D<sup>a</sup> Ana García Orruño, con destino actual en la Sección 4<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

El pleno da la bienvenida a la Ilma. Magistrada D<sup>a</sup> Ana García Orruño y agradece a la Magistrada D<sup>a</sup> Inés Soria Encarnación el trabajo desempeñando tanto en la comisión como en el pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

### **1.3.-INFORME SOBRE IDONEIDAD PARA NOMBRAMIENTO DE TUTORES/AS Y DESIGNACIÓN COORDINADOR/A DE JUECES/JUEZAS EN PRÁCTICAS.**

Se da cuenta al Pleno del escrito remitido por la Secretaría de Prácticas Tuteladas del Consejo General del Poder Judicial, al que se adjunta relación de Magistrados/as destinados en el ámbito de este Tribunal Superior de Justicia que han presentado solicitud para desarrollar la función de tutores/as en las prácticas tuteladas de la 74<sup>a</sup> promoción, en el que solicita, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento 2/2000, de 25 de octubre, de Jueces Adjuntos, informe para la determinación de la idoneidad de los solicitantes para desempeñar la referida tarea.

Igualmente se solicita la designación de un coordinador o coordinadora de la Escuela Judicial en el territorio de este Tribunal Superior de Justicia para la colaboración con los profesores del área de Prácticas tuteladas de la Escuela Judicial y las demás tareas que se señalan en dicho escrito de entre los tutores y tutoras propuestos.

Las solicitudes presentadas son las siguientes:

Provincia de Bizkaia:

-D. Inés Soria Encarnación, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao, con número de escalafón 2684.

-D. José María Eguia Baltellas, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao, con número de escalafón 1230.

-Dña. Marta Iciar Fernández- Hierro Martínez, Magistrada del Juzgado de Instancia número 10 de Bilbao, con número de escalafón 3396.

-D. Antonio Luis Latorre Mercado, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao, con número de escalafón 3367.

-D. Juan Carlos Mediavilla Guerra, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 1 de Bilbao, con número de escalafón 2320.

-Dña. Ana Aurora Torres Hernández, Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 10 de Bilbao, con número de escalafón 2694.

Por el cambio de situación administrativa de servicio activo a servicios especiales de la Ilma. Sra. Magistrada Doña Inés Soria Encarnación decae la solicitud presentada por la misma.

De conformidad con lo interesado por la Secretaría de Prácticas Tuteladas del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a la 74<sup>o</sup> promoción de la Carrera Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Jueces Adjuntos 2/2000 de 25 de octubre la Sala de Gobierno informa que teniendo en cuenta la identidad de los solicitantes para actuar como tutores en el período de prácticas tuteladas no existe ningún motivo objetivo o evaluable que permita

otorgar preferencia para designar como tutores a alguno de los Magistrados con respecto a otros, ya que todos cumplen las condiciones necesarias de idoneidad imprescindibles para desempeñar en forma adecuada y diligente esta función.

Por lo que todos los solicitantes están perfectamente capacitados para desempeñar la función de Magistrados tutores.

En cuanto a la designación de coordinador/coordinadora territorial para la Escuela Judicial dado que los tutores reúnen méritos suficientes para desempeñar el cargo la Sala, conforme al criterio objetivo de antigüedad en el escalafón, acuerda designar, al Ilmo. Sr. D. Jose Maria Eguia Baltellas coordinador territorial.

Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Prácticas Tuteladas del Consejo General del Poder Judicial y participése a los Magistrados seleccionados.

#### **1.4.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME ELABORADO POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, SOBRE LA NECESIDAD DE INCREMENTO DE LA PLANTA JUDICIAL PARA LA PROGRAMACIÓN 2024**

Se da cuenta al Pleno del informe emitido por el Servicio de Inspección, sobre la necesidad de incremento de la planta judicial para la programación 2024, cuya remisión a esta Sala de Gobierno fue acordada con fecha de 04 de julio de 2024 por la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial.

Por el Pleno se toma conocimiento del citado informe y las previsiones que en el mismo se recogen sobre la creación de un Juzgado de Instancia nuevo para Bilbao, el número 18, con competencia exclusiva en materia de medidas de apoyo de personas con discapacidad y un nuevo Juzgado de Instancia para Donostia- San Sebastián, el 9. Por unanimidad, y habiéndose solicitado observaciones, acuerda, incidir en la propuesta que el Pleno de la Sala de Gobierno hizo en acuerdo de 29 de marzo de 2024 sobre las necesidades de creación de unidades judiciales donde, si la previsión era de crear dos unidades judiciales para la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo prioritario era crear el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Donostia-San Sebastián y el Juzgado de lo Social nº 13 de Bilbao. De forma complementaria, y dentro del orden civil, se estimaba necesario, también, crear, en el orden civil, juzgados de instancia en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Barakaldo, sin circunscribirlo, de manera excluyente (aunque si pudiera ser materia compartida) a la adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad. Se remite, al respecto, el acuerdo adoptado con la ponencia que le sirvió de cobertura.

### **2.- Relativo a Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos**

### **3.- Relativo a Jueces de Paz**

### **4.- Área Disciplinaria**

(Sin Asuntos)

## **5.- Medidas de apoyo y Seguimiento**

### **5.1.- SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DE REFUERZO PARA LA SECCIÓN TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA. JUNTA SECTORIAL DE MAGISTRADOS DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE NORMAS DE REPARTO.**

Se da cuenta al Pleno del informe presentado con fecha 19 de enero de 2024 por la Ilma. Sra. Presidenta de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, así como de la documentación complementaria presentada el 7 de febrero de 2024, relativos a la solicitud de una medida de refuerzo consistente en el nombramiento de un Magistrado de refuerzo para dicha Sección.

Igualmente se da cuenta al Pleno de la Junta Sectorial de Jueces de la Ilma. Audiencia Provincial de Gipuzkoa celebrada el 1 de julio de 2024, a fin de dar cumplimiento al Acuerdo 5.1 del Pleno de la Sala de Gobierno de 22 de marzo de 2024 relativo al Mapa Judicial de Necesidades del año 2024 que acordaba dar cuenta a la Ilma. Sra. Presidenta de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de la situación del reparto entre la Sección Primera y Tercera para que en el caso de que lo estimara oportuno, se convoque Junta de Magistrados para proponer medidas de reparto equitativas entre ambas secciones, quedando a la espera la petición de refuerzo para la Sección tercera de esa Audiencia.

La citada Junta es del tenor literal siguiente:

*“Declarándose abierto el acto por parte de la Presidenta en funciones de la Audiencia Provincial Doña Yolanda Domeño Nieto se concreta por parte de ambas Presidentas de las Secciones Penales que:*

*Habiéndose detectado que el reparto de esta Audiencia se estaba realizando de manera errónea y no conforme a las Normas de Reparto sería conveniente proceder a rectificar el mismo , de conformidad con el número de Magistrado que integran cada una de las dos Secciones con competencia penal de esta AP. , Primera y Tercera , debiendo aplicarse un porcentaje de reparto 100% API — 75% AP3 en las siguientes categorías, al no tratarse de especialidades y corresponder el conocimiento a las dos Secciones:*

*-220204 Cuestiones de competencia. Resto de juzgados*

*-22030104 Abstenciones. De jueces y magistrados de órganos unipersonales.*

*Resto de juzgados*

- 220302 Abstenciones. De Magistrados de la Audiencia Provincial
- 2204010104 Recusaciones. Instrucción de los expedientes. De jueces y magistrados de órganos unipersonales. Resto de juzgados
- 22040102 Recusaciones. Instrucción de los expedientes. De Magistrados de la Audiencia Provincial
- 2204020104 Recusaciones. Resolución de los expedientes. De jueces y magistrados de órganos unipersonales. Resto de juzgados
- 22040202 Recusaciones. Resolución de los expedientes. De Magistrados de la Audiencia Provincial
- 22050304 Recurso de Queja. Resto de Juzgados
- 22050104 Recursos. Recursos contra autos y providencias. Resto de Juzgados
- 22050204 Recursos. Recursos contra sentencias. Juzgados de los Penal (Juzgados no especializados)
- 2205020202 Recursos. Recursos contra sentencias. Juicios rápidos. Resto de juzgados
- 22060202 Procesos en Primera Instancia. Sumarios. Juzgados de Instrucción
- 22060302 Procesos en Primera Instancia. Procedimientos Abreviados. Juzgados de Instrucción.

Si bien en cuanto a la categoría 22060102 Procesos en Primera Instancia. Tribunal del Jurado. Resto de Juzgados debe señalarse que se deberá observar, además , del porcentaje en relación al número de Magistrados que integran cada Sección , 4 Magistrados la Sección 1<sup>o</sup> y 3 Magistrados la Sección 30 a lo prevenido en las Normas de Reparto de esta AP. en referencia a esta categoría específica en que textualmente se señala:

*"Los asuntos referidos a la clase RTJ (ROLLO TRIBUNAL DE JURADO) se repartirán aleatoriamente entre los Magistrados / as que integrna la Sección Primero y la Sección Tercera. Cada asunto correrá turno y no corresponderá otro asunto de esta clase al mismo Magistrado/ a hasta que el resto de Magistrados / as hayan cubierto turno".*

*Tras un breve debate en relación con la cuestión planteada se tiene por conveniente rectificar el reparto en los términos señalados debiendo comisionar a los organismos competentes a fin de que realicen los ajustes necesarios para lograr su plena efectividad.*

*Seguidamente, se da por concluida la presenta Junta de Jueces, siendo las 13:30 horas del día 1 de Julio de 2024."*

El Pleno, acuerda aprobar por unanimidad las normas de reparto presentadas para distribuir el trabajo teniendo en cuenta el número de Magistrados/as de las Secciones Primera y Tercera, dando un tiempo razonable para verificar los efectos que conlleva la aplicación de la citada modificación, y a la vista de su resultado, pueda volver a plantearse la necesidad de apoyo de la Sección Tercera de la Audiencia.

De conformidad con el artículo 71.2 del Reglamento 1/2000 de 26 de julio de los Órganos de Gobierno, remítase la referida Acta al Consejo General del Poder Judicial para su toma de conocimiento y control de legalidad.

## **6.- Asuntos Varios**

### **6.1.-PROGRAMA AVANTIUS.**

Por el Excmo. Sr. Presidente se da cuenta al Pleno del contenido de la reunión del Comité de Seguimiento Avantius celebrado el pasado 17 de junio de 2024 en la que se abordaron el estado de las acciones comprometidas y las áreas de mejora sobre el aplicativo, los grupos de configuración estadística, archivo de expedientes, remisión de expedientes al Tribunal supremo.

Se abordaron las mejoras en el catálogo de servicios.

Igualmente se acordó la presentación del plan de formación continuada para Bizkaia y las fechas para instalación de la versión 5.5 de Avantius en la que se incluirán mejoras a la incorporación automática de las resoluciones y los datos de las intervinientes, en la interposición de recursos de apelación ante la Audiencia Provincial y la integración con el servicio de correos.

Sobre este asunto la Ilma. Sra. Garbiñe Biurrun y el Ilmo. Sr. Luis Angel Garrido solicitan se subsane la tardanza de la publicación de las sentencias dictadas por las Salas del TSJ en el CENDOJ, cuestión reiteradamente constatada.

Asimismo, por la Ilma. Sra. María Mercedes Guerrero se solicita que cuando se produzca una incorporación de un nuevo Juez/a o Magistrado/a por parte del personal de Avantius se les preste una formación presencial sobre funcionamiento del sistema.

Se acuerda trasladar ambas cuestiones a los organismos competentes.

### **6.2.- ANALISIS DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS POR EL GRUPO DE DECANOS/AS**

Por el Excmo. Sr. Presidente se da cuenta al Pleno de la propuesta relativa a la gestión de los Grupos de Trabajo para la mejora de la Gestión de Decanato aprobada en la reunión con los decanos de 29 de mayo de 2024, en la que se acordó entre otros extremos, los siguientes del tenor literal siguiente:

- *Autorización para la obtención e imágenes (responsables, Aner Uriarte y David Serna).*  
*Tras el debate final, se aprobó el documento tras la incorporación de las condiciones jurídicas para la autorización en los casos de peticiones de*

*productoras o creadores de obras audiovisuales. Se remitirá, por lo tanto, a la Sala de Gobierno para que debata si procede su aprobación.*

- *Ley de Bienestar Animal y entrada de animales en edificios judiciales (responsables Laura Yuste y Aner Uriarte).*

*Se debatió la propuesta presentada. A partir de las premisas normativas contenida en la misma y en aras a lograr una postura homogénea en la Comunidad Autónoma se decidió que, con la excepción de los perros de asistencia, se prohibirá el acceso de animales de compañía a los edificios judiciales en la medida que pueden entorpecer el desarrollo de los juicios, vistas, comparecencias y actuaciones jurisdiccionales y generar una dificultad adicional de cumplimiento de la obligación de vigilancia o supervisión personal del responsable del cuidado y comportamiento. Esta prohibición deberá figurar debidamente señalizada y visible desde el exterior. Esta propuesta se remitirá a la Sala de Gobierno para que debata si procede su aprobación.”*

El Pleno, tras examinar y debatir las propuestas, aprueba ambos documentos agradeciendo a los/las Decanos/as el trabajo efectuado.

#### **NOTIFICACIÓN DE ACUERDOS.**

La Sala acuerda, por unanimidad, notificar a todos los interesados los acuerdos adoptados en esta reunión.